

Hacia una antropología de la paz: la reintegración de excombatientes guerrilleros a la sociedad colombiana

Santiago Álvarez¹

Ana Guglielmucci²

Pedro Torres Palacio³

-
- 1 Santiago Álvarez es PhD y máster en Antropología Social por el London School of Economics (LSE). Profesor titular de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Argentina; profesor de Antropología Política en la Maestría en Antropología Social IDES-IDAES-Universidad Nacional de San Martín, Argentina; profesor titular de la cátedra de Antropología de la Comunicación Social en Universidad de San Andrés (UDESA), Argentina; co-coordinador del grupo de estudios en violencia y justicia del Instituto de Desarrollo Social (IDES). Ha realizado trabajo de campo de 1994 a 1996 en la región de Sumapaz, Cundinamarca, Colombia, en donde estudió las relaciones entre la violencia interna y externa en una comunidad de los Andes colombianos. Ha continuado trabajando en el Sumapaz, adonde regresó en varias ocasiones, y últimamente está involucrado en proyectos de investigación sobre el proceso de paz colombiano en Urabá, Chocó y Sumapaz.
 - 2 Ana Guglielmucci, doctora en Antropología por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación sociocultural por la misma universidad, ha realizado su posdoctorado en el Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Es Profesora adjunta del Centro de Estudios sobre Conflictos y Paz de la Universidad del Rosario, Bogotá; investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina (CONICET); docente del Departamento Antropología de la UBA; co-coordinadora del grupo de estudios sobre violencia y justicia en el IDES, Argentina. Es, además, miembro del grupo de trabajo de CLACSO Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia. Actualmente, está investigando sobre debates contemporáneos en memoria, arte y museología, y sobre la violencia política en Argentina y Colombia. En estos últimos años ha desarrollado trabajo de campo en Vaupés, Colombia.
 - 3 Pedro Torres Palacio es máster en Antropología Social en IDES-IDAES-Universidad Nacional de San Martín, Argentina y licenciado en Trabajo Social por la Universidad de Antioquia, Colombia. Es docente en la Universidad de Antioquia

Hacia una antropología de la paz

Este artículo busca hacer visibles problemas que, a menudo, pasan imperceptibles en el debate, la firma y la aplicación de los acuerdos de paz. Argumentamos que el uso de la investigación aplicada, con una mirada antropológica y con metodologías etnográficas, enriquece el análisis de estos procesos a nivel local. Nos enfocamos en la implementación de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) firmados en 2016. Para ello mostramos dos casos etnográficos, que nos hacen ver las diferentes circunstancias presentes en la reintegración de exguerrilleros a la sociedad nacional.

El primer caso muestra la angustia provocada por la espera. Durante una visita a un campamento provisional de excombatientes guerrilleros, entrevistamos a un excomandante de las FARC. Él compartió con nosotros sus opiniones y pensamientos sobre la experiencia de “limbo” de muchos excombatientes esperando incorporarse plenamente a la vida civil. El segundo caso ilustra la diversidad de las condiciones locales de reintegración: excombatientes retornando a sus comunidades indígenas en el departamento de Vaupés, que deben pasar por el escrutinio y la ulterior aceptación de los ancianos o autoridades comunitarias, como los capitanes.

Con base en estos estudios, en primer lugar, nos preguntamos cómo podemos aplicar una mirada antropológica con metodologías etnográficas para poder analizar el impacto de las políticas de paz en las experiencias de excombatientes dentro de diferentes contextos locales de reintegración. Y, en segundo lugar, si puede este conocimiento pro-

y conferencista de la cátedra universitaria Política Pública del Desplazamiento Forzado en Colombia, en diversas universidades del departamento de Chocó, en el marco de un convenio entre el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), el Consejo Noruego por los Refugiados y el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo. Desarrolló trabajo de campo en Chocó (río Atrato) y en Urabá, y trabajó en el área de Alerta Temprana para la Defensoría del Pueblo (2015) en Urabá y Cundinamarca.

veer datos útiles a los formuladores y promotores de políticas de paz. Nuestra investigación demuestra que, la antropología aplicada puede aportar contribuciones relevantes a los estudios de la ciencia política sobre conflicto y paz (Hydle, 2006), así como a la interacción entre las relaciones internacionales (RI) y la ciencia política (CP). Richmond (2018), en este sentido, reclama un lugar para la antropología en un campo donde existe una tensión:

Entre la gubernamentalidad y la emancipación, con culturas [...] y racionalidades de seguridad, gobernanza, paz y liberación en competencia. No se puede lograr una nueva —quizás cuarta generación— de pacificación sin que la antropología —sus métodos, ética y perspectivas— ocupe un lugar en las RI y, las RI dejen espacio a la antropología. (p. 221)

En el texto que sigue, intentaremos enriquecer el análisis de los procesos de paz a través de la presentación de dos casos basados en la experiencia de reintegración en sociedad de excombatientes guerrilleros.

Marco conceptual

Usamos el enfoque antropológico para entender cómo vidas de personas reales son afectadas por la violencia, el poder y la política durante situaciones de posconflicto. Este enfoque contrasta con perspectivas que tienden a describir a las personas como destinatarios pasivos de la acción de fuerzas sociales, económicas políticas e ideológicas (Bloch, 2020). Burnyeat (2020) enfatiza el rol “que relaciones fundamentales entre ciudadanos y Estado juegan en comunicar las principales políticas gubernamentales a la sociedad, y la importancia de tener en cuenta marcos interpretativos históricamente constituidos, de acuerdo a los cuales los ciudadanos perciben el Estado” (p. 38).

La perspectiva de los hacedores de políticas, basadas en varios estudios sobre paz, guerra y violencia difuminan la experiencia de los destinatarios o supuestos beneficiarios. Richmond (2018) argumenta

que los diseñadores de políticas están “más enfocados en acuerdos políticos y en modos de compartir poder” (p. 221), un marco conceptual sobre el Estado y la sociedad que no se aplicaría correctamente a situaciones de posconflicto. Una perspectiva antropológica podría ser más adecuada para comprender las cambiantes circunstancias experimentadas en posconflictos por diferentes actores.

Los estudios geográficos sobre el proceso de paz colombiano enriquecen el debate. Koopman (2020) considera a los acuerdos colombianos como ejemplares, afirmando que “Colombia se transformó en un modelo a seguir cuando firmó el acuerdo de paz más inclusivo en el mundo en 2016 [uno que intenta reparar discriminaciones] que fueron conformadas o intensificadas por la guerra” (p. 1). Cairo *et al.* (2018) afirman que el texto de los acuerdos da cuenta de inequidades de raza, género y sexo y hace referencia a una “paz plural y territorial” (p. 471). Sumando una dimensión espacial, Cairo, Koopman y otros autores teorizan el concepto de “paz territorial”. Para Cairo *et al.* (2018), el concepto tiene “diferentes interpretaciones de lo que territorio significa según cada quién —el Estado, la guerrilla, las asociaciones campesinas, las minorías étnicas, etc.—” (p. 465). Todos estos actores tienen un rol crucial en “la construcción de una paz estable y duradera” (p. 465). Koopman (2020) considera que la oposición al acuerdo de paz colombiano se debe principalmente al hecho de que “como acuerdo inclusivo, da cuenta de esas desigualdades” (p. 9).

Dado que guerra y paz son usualmente consideradas espacios masculinos, las perspectivas feministas en antropología proponen lecturas del proceso de paz que enfatizan logros y desafíos. Gómez y Montealegre (2021) afirman que, “a pesar de la excepcionalidad histórica de varios de sus logros, el reconocimiento de la mujer como un actor clave en el proceso de paz queda minimizado en una sociedad patriarcal cuyo conservadurismo fue exacerbado” (p. 457).

Otros antropólogos critican algunas afirmaciones posconflicto que dan por hecho que, la transición hacia la paz va a inaugurar mágicamente un nuevo orden social, como una experiencia de posguerra

descrita como supuestamente detenida en el tiempo y sin relación alguna con la posición social de los actores. Por el contrario, para Alves (2021), los tiempos de guerra y los tiempos de paz son experimentados en referencia a la alteridad racial de cada uno, “a través de categorías de personas a las que se considera asesinales o no, de acuerdo a su posición en la jerarquía humana. Esa escala está racializada” (p. 145). Del mismo modo, Espinosa (2007) centra su análisis en expresiones de violencia enraizadas en racismo.⁴ En una evaluación de los resultados de los acuerdos, Jiménez Martín y Zuluaga Nieto (2021) acuerda con quienes encuentran imperfecciones en el acuerdo y en sus implementaciones. Ellos hacen notar que los acuerdos priorizan la “dejación de armas” por sobre el establecimiento de un marco institucional para la paz, incluyendo el cerrar brechas económicas para la democratización de la sociedad. Los acuerdos y las intervenciones posconflicto tratan de minimizar o terminar con el conflicto social. Sin embargo, ya Gluckman (1958) argüía que el conflicto social es un elemento inseparable de la asociación humana y que todas las sociedades tienen medios para evitar la violencia y controlar el conflicto. Si la violencia y el conflicto están presentes en toda sociedad y la paz resulta de la ausencia de la violencia adheriríamos a un concepto negativo de la violencia (Galtung, 1996). En cambio, estamos de acuerdo con Borneman (2020), que define a la paz como a un “proyecto de salida de la violencia” (p. 282) en el presente. En este enfoque que consideramos más positivo, la paz se transforma en un proceso orientado hacia la cooperación social y el desarrollo humano. De este modo, una antropología de la paz debería enfocarse en el análisis social y cultural de las sociedades para intentar comprender cómo las tensiones y los conflictos producen o reproducen violencia. Este conocimiento debe ser útil en el

4 La paz y la guerra son tópicos muy discutidos por los científicos sociales que trabajan en Colombia, donde décadas de violencia endémica han coexistido con un Estado-nación incapaz de monopolizar el uso de la violencia o mantener el control sobre todo el territorio nacional (Bergquist *et al.*, 1992; Pecault, 2001). Los estudios sobre violencia se han asociado tradicionalmente a informes, elaborados por diferentes comisiones y realizados en los últimos cincuenta años: 1958, 1987, 2013 y 2016.

proceso hacia el control de los conflictos violentos y la búsqueda de ambientes más pacíficos.

El concepto de reintegración es usado en antropología fundamentalmente para comprender rituales, especialmente ritos de pasaje. Estos ritos son, qué duda cabe, una temática clásica de la antropología (Bloch, 1994; Turner, 1974, 1990; Van Gennep, 1986). Van Gennep nos muestra cómo los actores de un rito de pasaje pasan de un estadio del que son separados de la sociedad, un estadio que define como liminal, a uno en el que estos son reintegrados a la sociedad (Bloch, 1994). En su trabajo sobre la reintegración de niños soldado en Sierra Leona, Schepler (2005) afirma que “su ‘reintegración’ es alcanzada en la práctica social a través de una variedad de contextos usando una variedad de identidades adoptadas estratégicamente” (p. 198).

En Colombia se usan dos conceptos nativos para referirse a la reintegración: “reincorporación” y “reinserción”. Reincorporación hace referencia al proceso de desmovilización de un grupo armado o a parte de uno, a consecuencia de un acuerdo coordinado de carácter político. Se utiliza reinserción cuando el proceso ocurre como consecuencia de una elección individual, casi percibida como una decisión íntima. El pasaje de combatiente a civil, de guerrero a ciudadano, no es nunca ni unidireccional ni homogéneo.

Violencia política en Colombia

Para entender los eventos actuales en Colombia se hace necesario tener en cuenta al pasado. Han existido constantes y repetidas expresiones de violencia política en Colombia durante gran parte del siglo y en el comienzo del siglo XXI. La mayoría de ellas, desarrolladas en las áreas rurales (Jaramillo Marín, 2012). Con el asesinato de José Eliecer Gaitán en Bogotá el 11 de abril de 1948, Colombia entra en un período turbulento llamado La Violencia, que dura de 1948 a 1965. Gaitán era un líder carismático del ala izquierda del partido Liberal, gran orador, usaba un discurso populista radical que era escuchado por

amplios sectores. Luego de su asesinato, miles de personas se levantaron espontáneamente en Bogotá y en todo el país (Sánchez, 1992, p. 83).

Si bien el orden fue restablecido en las principales ciudades, la guerra que se desató entre conservadores y liberales continuó, especialmente en las zonas rurales. Para 1953, un golpe de Estado, liderado por el general Rojas Pinilla, con el anunciado objetivo de restablecer el orden, constituyó un gobierno militar. Ante estas circunstancias, para 1957, los líderes políticos de los partidos Liberal y Conservador llegaron a un acuerdo que permitiría la alternancia de los dos partidos en la presidencia. Este acuerdo fue resistido en las áreas rurales en las que muchos campesinos se reorganizaron y continuaron la lucha. Este es el origen de las FARC-EP.

El Estado colombiano ha sido desafiado por múltiples actores armados, a menudo enfrentados entre sí (Bergquist *et al.*, 1992). Algunos, como las FARC-EP, han operado continuamente desde los 60; otros grupos guerrilleros, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN),⁵ empezaron posteriormente. Todos estos grupos han controlado, total o parcialmente, partes del territorio colombiano. Además, se conformaron grupos paramilitares que combatieron las guerrillas y que también controlaron áreas del territorio nacional. Estos grupos están relacionados en mayor o menor medida con el tráfico de drogas y cuentan con porosos contactos en el Estado, en particular con las fuerzas de seguridad, tanto a nivel local como nacional.

Luego de cuatro años de negociaciones, los acuerdos de paz de la Habana fueron firmados entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Los acuerdos establecen soluciones complejas para temas como la reintegración de los excombatientes a la sociedad, la política de devolución de tierras, seguridad, derechos humanos, pacificación y construcción de la paz, así como la dignificación de las víctimas

5 El ELN es una guerrilla y movimiento social que ha operado en Colombia desde 1964.

y su reparación. Cada uno de estos asuntos es usualmente de difícil implementación, lo que produce la ralentización del proceso de paz.

Diseño de la investigación y metodología

Nuestra investigación está centrada en producir conocimiento acerca de la implementación de los acuerdos de paz; en particular sobre problemas no detectados en la firma de los convenios y observados durante la fase del posconflicto. Estos problemas y tensiones impiden o dificultan a los antiguos combatientes cumplir con sus necesidades y expectativas. Para alcanzar estos objetivos fijados, hicimos uso de un conocimiento interno, obtenido con métodos cualitativos, de las tensiones y clivajes experimentados por los excombatientes durante la implementación del programa de paz.

Figura 1

Líder guerrillero y Santiago Álvarez en la visita al campamento en el Chocó



Para ello, usamos una combinación de investigación etnográfica con entrevistas abiertas en profundidad para obtener datos sobre dos

grupos diferentes de excombatientes. En el análisis de los datos, construimos dos casos de estudio y los comparamos y contrastamos entre sí y con los textos de los acuerdos de paz. Esto nos permitió conectar lo que habíamos observado sobre la vida de personas reales en una dimensión interna, con un marco institucional, en una dimensión externa. Lo hicimos así porque, en definitiva, “nuestros esfuerzos deberían centrarse en entender cómo, en la vida real de todos los días, lo externo y lo interno se alimentan el uno al otro y son, en última instancia inseparables” (Bloch, 2020, p. 14). Nuestra investigación confirma la observación de Barrios Sabogal y Richter (2019) de que “la fase de reintegración presenta desafíos más complejos que las fases del desarme y la desmovilización” (p. 759). Encontramos que, la intervención del Estado en la aplicación de las políticas de paz carece a menudo de una información detallada sobre las dinámicas de las relaciones sociales dentro de las comunidades locales que deben recibir a los excombatientes.

Estudio de caso nro. 1: esperando por la reintegración en un campamento de excombatientes de las FARC-EP

Uno de los resultados no esperados en las intervenciones planificadas para aplicar los acuerdos de paz es el impacto de la incertidumbre cuando los excombatientes esperan por su reintegración. Decidimos enfocarnos en un trabajo etnográfico realizado en el área de Urabá-Bajo Atrato. Esta región, situada entre los departamentos de Antioquia y Chocó, en el norte de Colombia, ha sido objeto de constante disputa a consecuencia de su emplazamiento geográfico estratégico entre el mar Caribe y el océano Pacífico lindante, además, con la república de Panamá (Álvarez & Torres Palacio, 2020; Steiner, 1993).

Durante el trabajo de campo visitamos un ETCR (espacio territorial de capacitación y reincorporación).⁶ Estos espacios son,

6 Esta observación del campamento de la exguerrilla y la entrevista con el excomandante Patricio, fueron parte de una investigación más amplia: “Observación y análisis crítico del proceso de paz en la república de Colombia entre las FARC-

supuestamente, locaciones provisionales para exmiembros de las FARC que aceptaron la desmovilización. Además, los ex-FARC crearon un partido político manteniendo el acrónimo FARC, que en este caso pasó a significar: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Por el contrario, aquellos combatientes de las FARC que continuaron combatiendo tomaron el nombre de FARC-Disidencia.

Luego de un largo y extenuante viaje que incluyó cambiar varias veces de transporte por caminos de difícil tránsito, llegamos a Belén de Bajirá, un poblado disputado por los departamentos de Antioquia y Chocó. Allí nos subimos a un vehículo de tres ruedas, una moto con chasis, para llevarnos al campamento de las FARC, una de las gomas se pinchó y debimos esperar bajo un sol infernal a que apareciera otro transportador informal que nos condujera finalmente a destino. El campamento se encuentra en una zona cercana al lecho inundable del río Curvaradó, afluente de uno de los principales ríos de Colombia, el Atrato. Las posibilidades de ser anegados por una creciente son altas (Álvarez & Torres Palacio, 2020).

En la entrada del campamento se encuentra un espacio que fue utilizado por la ONU para el proceso de la entrega de armas y que luego fuera desmantelado y sus restos ocupados por la policía colombiana. Esta fuerza, por un lado, controla a las ex-FARC, por el otro, las protege del ataque de otras fuerzas irregulares: los paramilitares o la guerrilla del ELN. Debemos adentrarnos un poco más antes de llegar al campamento en sí. La población se aloja en barracones grandes prefabricados, de un material muy liviano, casi de cartón corrugado, y con techos de aluminio-zinc que no logran aislarlos del calor proyectado por los inclementes rayos solares. En los exteriores

EP y el Estado colombiano”. Fue un proyecto de dos años (2016-2018), financiado por la Universidad Nacional de la Defensa (UNDEF-Buenos Aires) y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina. En este marco, desarrollamos una observación profunda de la zona Urabá-Bajo Atrato. Se observó el problema de la restitución de tierras y la situación campesina en Urabá, así como los problemas de grupos étnicos en el río Atrato hostigados por el ELN y las fuerzas paramilitares (Álvarez y Torres Palacio, 2020).

de casi todos esos espacios se pintaron diseños de paisajes, grafitis y frases que aluden a la esperanza y que evocan, haciendo visuales los rostros, a exmiembros de las FARC que murieron en tiempos de confrontación armada, incluido al del conocido exjefe guerrillero Manuel Marulanda Vélez. En su interior hace más calor que afuera (la referencia es necesaria, más allá de que estemos desde hace días en “tierra caliente”, en el campamento se siente como un fuego abraza-dor). Los exguerrilleros tratan, en lo posible, de mejorar el lugar, han colocado canteros con flores y tratan de canalizar las aguas estancadas.

En el campamento viven alrededor de 200 excombatientes. Su vida se ha vuelto, de alguna manera, precaria y dominada por la incertidumbre. Desde que los excombatientes llegaron al emplazamiento, se convirtieron en extremadamente dependientes de la ayuda del Gobierno que consistía, básicamente, en una provisión semanal, principalmente de alimentos. Fuimos testigos de sus quejas. Incluso existiendo suficientes provisiones para todos no se sentían autónomos como antes. En el monte ellos sabían cómo vivir y sobrevivir. Acostumbraban a moverse de un lugar a otro, a esconderse cuando fuere necesario, a luchar y a confiar en sus propias fuerzas. En el campamento, en cambio, se volvieron sedentarios y peligrosamente dependientes de su anterior enemigo. Estaban angustiados porque no sabían cuándo este aprovisionamiento iba a terminar. Había una relación confianza-desconfianza entre los excombatientes y el Estado. Oficialmente, estos asentamientos fueron creados como la consecuencia del proceso de desmovilización y dejación de armas. Su continuidad en el tiempo no había sido, de manera alguna, prevista.

En el campamento están también construyendo una escuela por los quince niños que han nacido y que muestran un boom de natalidad causado por el abandono de las armas y la más abierta convivencia entre compañeros. Cuando eran combatientes, las parejas que se formaran no podían vivir juntas ni tener hijos. Ahora, fuera del monte, observamos a varias parejas abrazándose y besándose públicamente, así como algunos niños moviéndose ruidosos y alegres por el campamento.

Figura 2
Vistas del campamento en el Chocó



Una mujer, Clara, nos encara. Joven, de entre veinte y treinta años, todavía usaba sus pantalones militares combinados con una remera. Nos mostró, con orgullo, su bebé recién nacido. Clara estaba preocupada sobre el futuro y se quejaba de las dificultades de criar hijos en el asentamiento. Quería establecerse con su compañero en una pequeña finca que su familia tenía en algún lugar de Antioquia. No quería volver a su antigua vida de combatiente. Nos dijo: “Espero que todo esto termine, así podemos vivir libres como todo colombiano”. Nos parece relevante apuntar que la nueva vida que estaba deseando y buscando estaba basada en el casamiento y la maternidad así como a tener una finca.

Llevamos adelante una entrevista abierta con Patricio, anterior comandante del Frente 57 de las FARC. Patricio es un hombre joven, alrededor de treinta años, con la cabeza rapada, pero con una leve, incipiente barba sin afeitar. Viste una camiseta blanca y unos jeans. Se muestra formalmente cordial mientras mantiene siempre las distancias. Guarda un largo silencio al principio, esperando que agotemos nuestra presentación, recién allí comienza a hablar pausadamente. En sus gestos, en su actitud, en sus maneras, nos trae reminiscencias de otros cuadros militares-políticos de las FARC. Se expresa con un discurso articulado, pero al mismo tiempo calculado y siempre, desde nuestro punto de vista, cerrado.

Patricio nos comparte su preocupación sobre las condiciones de vida en el campamento. Nos explica que algunos de sus compañeros han ido a reencontrarse con sus familias. Otros se han ido a otras zonas del país en busca de mejorar su suerte en la vida civil y unos pocos han tratado de volver a la lucha armada.⁷ Nos cuenta que en

7 La cantidad de exguerrilleros de las FARC que ha retomado la lucha armada ha aumentado notablemente a partir de la política limitadora y en algunos casos francamente contraria a algunos aspectos de los acuerdos de paz. Aunque las fuentes oficiales no tienen un consenso en las cifras, a julio de 2019 se alude a que, a nivel nacional, como entre un 8 % (1134) y un 10 % (1417) de los y las excombatientes que dejaron las armas, las podrían haber retomado. El 29 de agosto de 2019, en los principales diarios de Colombia y el mundo, se leían titulares como este: “Iván

otras zonas del país algunos compañeros se han incorporado al ELN o a las autodefensas, por igual; un pequeño grupo, aclara, ha formado una disidencia de las FARC para seguir la guerra, “aunque por ese camino no les ha ido muy bien”, señala. Según él, “el grueso de las FARC se mantiene unido”.

Dentro de su discurso, coherente pero impermeable, Patricio afirma que las FARC nunca quisieron la confrontación. En lo que sigue, transcribimos sus ideas sobre el movimiento, los acuerdos de paz y los eventos desarrollados:

Siempre buscamos la paz, y estamos dispuestos a hacer concesiones. Como una organización armada siempre defendimos la solución política. Tratamos de pactar con varios Gobiernos. Apostamos todo a la búsqueda de un acuerdo mediante el diálogo, la dejación de las armas. En los encuentros de Oslo, las FARC aprobaron el proceso de paz y el décimo congreso de la organización la aprobó unánimemente. Comenzamos con el cese unilateral del fuego para llevar este proceso a feliz término.

Patricio nos expresó su inquietud por las acciones de los paramilitares. También le preocupaban las dificultades que encontraba para mantener a su grupo unido, aceptando el proceso de paz y evitando la tentación de volver a las armas:

A partir de que se decreta el cese bilateral, los continuadores del paramilitarismo pasaron a la ofensiva y ocuparon territorios. Pese a ello, continuamos en nuestra línea de desmovilización temporal moviéndonos hacia las zonas de desmovilización. Incluso antes de que dejáramos esos territorios, el paramilitarismo ya los estaba ocupando. Este ha sido uno de los principales inconvenientes del proceso.

Con respecto a la disidencia, con respecto a los que regresaron a la vía de las armas, nosotros ahora como partido político FARC [Fuerza

Márquez le da la espalda al proceso de paz y anuncia su rearme. A través de un video de 32 minutos, el exjefe negociador del Acuerdo de Paz en La Habana, rodeado de Jesús Santrich, ‘El Paisa’, Aldinever Morantes, ‘Romaña’ y otros dirigentes que se alejaron del acuerdo, anunció al mundo el nacimiento de una nueva guerrilla, dice Márquez, ‘para luchar por la paz traicionada’” (El Espectador, 2019).

Alternativa Revolucionaria del Común], no le encontramos justificación, vamos en esta dirección sin un paso atrás. El acuerdo era “cooperemos para hacer el tránsito”. Llegamos aquí para entregar las armas y hacer la reincorporación a la vida civil; no vamos a retroceder. Tal vez no haya garantías, pero no hay otra opción que el camino de la paz. Vamos a exigir en el marco de la legalidad que se cumpla, pero no regresaremos a las armas. Que se haga todo ante los ojos del mundo, que el mundo conozca lo que fuimos, lo que somos y lo que seguiremos siendo. Nosotros como excombatientes sabemos que esta lucha no fue fácil en la guerra y tampoco lo será en la política. Siempre le hemos señalado al Gobierno los incumplimientos del acuerdo.

Hemos luchado durante cincuenta y tres años, sin contar otros años en los que empezó la violencia contra el pueblo colombiano. En ese escenario, surge en 1964 las FARC. Tengamos en cuenta la desaparición del M-19 y el exterminio de nuestros compañeros de la UP [Unión Patriótica].⁸ En este proceso, quisimos que estuviera presente el mundo: inclusive propusimos que los Estados Unidos tengan un delegado. Que vengan y que vean.

No hemos concretado ni el veinte por ciento del acuerdo. Reforma rural y restitución de tierras: seis por ciento; tema político: doce por ciento; entrega de armas: sesenta por ciento. Todo esto después de un año de firmado el acuerdo. Hay “caletas”⁹ en la selva, pero frente al avance de los paramilitares no las podemos buscar. Sin embargo, hemos dado al Gobierno las coordenadas para que lo hagan. Acá en el Chocó, se había previsto que se haga efectivo en febrero [2018] y mire, nada. Organizaciones Internacionales están en esto y entonces no nos pueden echar la culpa.

8 La Unión Patriótica fue un movimiento político creado por el acuerdo entre las FARC-EP y el Partido Comunista Colombiano, además de la convergencia de otras agrupaciones menores. Fue fundado en 1985 para participar en las elecciones durante las negociaciones de paz con el presidente Betancourt. Sus militantes, desde el principio, fueron sistemáticamente asesinados por fuerzas paramilitares en las que convergían elementos provenientes del narcotráfico y de las fuerzas de seguridad estatales. Entre ellos, dos candidatos presidenciales, diputados, concejales, alcaldes y más de tres mil de sus integrantes.

9 Son los lugares ocultos donde se guardan armas, generalmente, están bajo tierra.

La reglamentación del acuerdo no se ha concretado. A pesar de un decreto, el Congreso transformó todo en una coladura de retazos. Hay actores dentro del Gobierno [en el momento de la entrevista todavía estaba en el poder el presidente Santos] que quieren sacar la ventaja que no se sacó durante la guerra ni en los acuerdos. La solución al tema de los cultivos ilícitos tardó como seis meses en salir y no se respetó.

Patricio estaba angustiado por los homicidios de excombatientes, cometidos especialmente por fuerzas paramilitares después del cese de fuego:

Estamos dispuestos al diálogo, pero nos siguen matando. Tenemos treinta y cinco compañeros asesinados desde que firmamos el acuerdo. Se han abatido también a excompañeros disidentes. Los disidentes se dan porque pierden la confianza en el proceso. Nos preocupa la seguridad no solo para todos los excombatientes, sino para toda la población rural. Nuestra gente no ha tenido una reincorporación, la mayor parte siguen en lugares transitorios, como nosotros.¹⁰

Estamos atados, queríamos organizar comisiones de pedagogía para explicar el sentido de los acuerdos de paz, pero no podemos desplazarnos de nuevo hacia los territorios. Hemos ido firmando el acta de sometimiento ante el Gobierno, pero no podemos salir y volver a los territorios. El Gobierno debe garantizar la seguridad, pero [esta] todavía no se ha hecho efectiva. Engañan a la población, les dicen: “Ellos se fueron y los dejaron solos”. Pero los pobladores no pueden venir acá y nosotros no podemos ir allá ¿cuándo nos volveremos a encontrar?

10 Desde la firma del acuerdo de paz hasta pasados dos meses que conversamos con Patricio, es decir, al 2 de abril de 2018, en Colombia se registraron 68 asesinatos de exmiembros de las FARC, en los que se incluyen 18 familiares y 6 desapariciones de excombatientes, según el informe oficial del Secretario General de las Naciones Unidas. Al 26 de diciembre de 2018, los asesinatos llegaban a 85, según la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (véase ONU, 2018a y b). Al 31 de julio de 2019, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y el último informe de la Misión de Verificación de la ONU, registraron 123 asesinatos de excombatientes y familiares de excombatientes de las FARC-EP, precisando que las FARC aseguran que los asesinatos suman 132 para el 31 de julio de 2019.

Estas citas revelan la angustia de Patricio sobre el futuro del proceso de paz. No puede ver la luz al final del túnel. Pensó que el proceso iba a continuar más allá de obtener ciertos logros y que incluiría una exitosa reintegración de los antiguos combatientes a la sociedad nacional:

Acá se concentró el Frente 57 de las FARC. Todos llegamos acá, todos concretamos el proceso, no hubo disidencias. Algunos han salido para donde sus familiares y amigos para ver qué expectativa logran cumplir. Tratamos de dar capacitación para reincorporarse, pero no tenemos a nadie para hacerla. Ahora nos quedamos aquí sentados esperando la cuenta básica del Gobierno [remesa]. ¿Vamos a esperar dos años de brazos cruzados?

¿Cómo veo el futuro? Dependerá de los esfuerzos de todos los colombianos, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Álvaro Uribe siempre le ha apostado a la guerra. Quiere imponer sus pretensiones para otro Gobierno. La peor situación de la violencia fueron los ocho años de Uribe. Vamos a ver cómo nos va en las elecciones. Ahora estamos acá, esperando.

La visita al campamento nos dejó con la sensación de que los excombatientes vivían en una espera constante, atrapados en un limbo legal que les impedía integrarse de modo completo a la vida civil (Álvarez & Torres Palacio, 2020). Los exguerrilleros, hombres y mujeres acostumbrados a la vida nómada en el monte, estaban ahora concentrados en un área cercada en donde la policía y el ejército de Colombia los protegía de los ataques del ELN o de las “nuevas” fuerzas paramilitares que merodeaban en los alrededores. Cercados en esta trampa liminal, los exmiembros de las FARC se encuentran en una transición que se hace eterna entre su estadio de combatientes a su estadio final como personas completamente reintegradas en la vida civil. Día y noche esperan las decisiones de su viejo enemigo, el Estado colombiano, como a un Godot que nunca llega.

Nuestras observaciones sobre el campamento de los exguerrilleros y la entrevista con el comandante Patricio nos dieron nuevas perspectivas sobre las dificultades del retorno a la vida civil. Este re-

torno debe ser percibido no como un momento determinado, sino como un largo y penoso proceso que, al momento de nuestra visita, había sido pospuesto.

Estudio de Caso nro. 2: tensiones intergeneracionales durante la reinserción de excombatientes indígenas en Mitú (Vaupés)

Este caso revela las exclusiones y los límites del escenario posterior a los acuerdos de paz. Vaupés es un departamento de Colombia que limita con Brasil y forma parte de la región amazónica. Su capital, Mitú, es una ciudad rodeada de una constelación de pequeños asentamientos (más de 200) sobre el río Vaupés. Estas aldeas, habitadas por comunidades indígenas, viven a partir de actividades propias de una economía de subsistencia y reciben servicios estatales muy precarios.¹¹ El río Vaupés corre desde el oeste al este y sirve como vía de comunicación entre numerosos pueblos ribereños, la mayoría de ellos habitados total o parcialmente por indígenas. Teniendo en cuenta sus características geográficas y su posición estratégica. El área estuvo bajo el control de las FARC-EP y, en el presente, lo está por el Frente Primero de la Disidencia de las FARC.

Entre 2016 y 2018 hicimos trabajo de campo en Mitú y en una aldea ribereña llamada Villa Fátima. Realizamos numerosas entrevistas en oficinas, casas, espacios públicos y “malocas”, centros de la vida cultural y social de los indígenas (Guglielmucci & Rozo, 2020). Entre estas entrevistas, conversamos con “Pablo” (líder indígena guanano), “Lucho” (excapitán indígena y padre de un menor reclutado por las FARC), su mujer “Laura” y “Samuel” (un excombatiente indígena de

11 Estos territorios forman la Gran Reserva Indígena del Vaupés, 25 grupos étnicos lo pueblan, el capitán es la principal autoridad de cada comunidad, aunque debe considerar la opinión de los ancianos como dueños del conocimiento tradicional.

FARC).¹² En Vaupés, el conflicto continúa y el Estado está presente predominantemente en términos militares y policiales.

La disidencia de las FARC ha apelado a diversas estrategias para mantener su retaguardia y movilidad en corredores del Vaupés. Ella le ha dado prioridad a la presencia de pequeños grupos en el territorio, sin uniformes, vestidos de civil, portando armas ligeras y envueltos en actividades que suponen poco esfuerzo bélico. Esto incluye principalmente tareas relacionadas con el control social y con garantizar los recursos para desarrollar el tráfico de drogas.¹³

Los grupos armados han reclutado a menores de edad entre las comunidades indígenas cercanas a Mitú desde los años 80. Ya sea si los menores ingresaron voluntariamente o si lo hicieron por la fuerza, tanto el reclutamiento como la subsecuente desmovilización presentan problemas para los individuos afectados y para la comunidad.¹⁴ Durante el trabajo de campo, pudimos identificar diferentes estrategias empleadas para reclutar menores, entender cómo el reclutamiento se produce y cuáles son los actores involucrados. El reclutamiento de menores resulta en un estigma tanto para la familia del menor como para su comunidad. Ambos culpan a las instituciones estatales —como

12 Usamos seudónimos por razones de seguridad.

13 Entre otras razones, el departamento de Vaupés ha sido un área de interés para la guerrilla ya que allí se han encontrado condiciones para el establecimiento de cultivos y laboratorios de coca, dada la precaria autoridad del Estado en la región (Vicepresidencia de la República de Colombia, 2004).

14 El reclutamiento de niños y niñas suele tener lugar de tres formas: obligatoria, forzada o voluntaria. El reclutamiento obligatorio es practicado por las fuerzas armadas nacionales de conformidad con las disposiciones de su legislación interna, aunque esta práctica está prohibida por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) cuando se trata de niños menores de quince años. El reclutamiento forzoso implica el uso de sistemas de cuotas por territorio, secuestro, amenazas a menores y coerción a sus familias. El reclutamiento voluntario es la elección libre del niño para unirse a un grupo armado, sin embargo, el reclutamiento voluntario muchas veces es el resultado de la vulnerabilidad que enfrentan los niños en situaciones de pobreza, abuso, discriminación y exclusión (Hinestroza-Arenas, 2008).

la escuela pupila, la oficina del alcalde o la policía— de connivencia y pasividad. Pero, el reclutamiento también es considerado como una responsabilidad de los padres, recayendo sobre ellos y sus comunidades la estigmatización por parte de las autoridades estatales.

Algunos jóvenes indígenas han sido reclutados de la escuela pupila de Mitú y llevados lejos de sus comunidades. En esos casos, las autoridades de la comunidad y los parientes de los menores acentúan la responsabilidad de las autoridades estatales, no solamente por el rol de la escuela como institución, sino también como consecuencia de la inacción del Gobierno local y de la policía. Los parientes de los menores se oponen, tanto al reclutamiento llevado a cabo por las FARC como también al llevado adelante por el ejército colombiano y la policía nacional, fuerzas con una fuerte presencia en el área desde que la guerrilla protagonizó la toma de Mitú en 1998. Por ejemplo, la policía comienza el proceso de reclutamiento solicitando listas de los estudiantes menores de edad a los preceptores y maestros para socializarlos en actividades relacionadas con el servicio militar obligatorio (CNMH, 2017).

Durante nuestro trabajo de campo a orillas del río Vaupés, miembros de las comunidades indígenas nos revelaron que las escuelas y las instituciones gubernamentales y religiosas no habían hecho mucho para prevenir el reclutamiento de estos adolescentes. Nuestros interlocutores mencionaron que las estrategias llevadas adelante por la guerrilla eran diferentes, empleando tácticas como la seducción, tanto a través de lo que denominaban “enamoramiento”, como a través de una serie de promesas relacionadas con las expectativas de los adolescentes por autonomía e independencia. Todo ello, en contextos en los que los jóvenes carecen de opciones para su desarrollo personal y donde varios menores cometieron suicidio a consecuencia de la falta de perspectiva percibida en su futuro terrenal.¹⁵

15 La tasa de suicidios en el Vaupés es cuatro veces superior a la nacional, siendo la más alta de todo el territorio colombiano (Universidad de los Andes, 2019).

Durante conversaciones que tuvimos con varios miembros de la comunidad de Villa Fátima y de otros asentamientos, padres de jóvenes afirmaron que algunos de sus hijos habían sido reclutados a la fuerza por la guerrilla, mientras que otros se habían integrado voluntariamente a los grupos armados en respuesta a diferentes tipos de propuestas.¹⁶ En el pasado, formaron parte de las FARC-EP y hoy se encuentran disociados de la guerrilla o, en menores casos, pueden formar parte de grupos criminales conectados con el narcotráfico. Cuando los menores de edad ingresan voluntariamente, a pesar de que ese consentimiento no es considerado legal, varias madres dicen sentir vergüenza por ellos, en especial cuando se trata de una niña. Para una madre, tener a una niña luchando en la selva va en contra de toda idea de lo que para la comunidad una joven mujer debería hacer. Dicen muchas de ellas que “una familia no cría a una hija para que se transforme en una guerrera, sino en una madre que cuida a sus hijos”. En estos casos, las estrategias llevadas a cabo por ellas para buscar el desenganche de sus hijas e hijos de la guerrilla son a menudo empeñadas individualmente. Algunas de estas madres encaran a los líderes de los grupos armados tratando de entablar negociaciones para recuperar a sus hijos e hijas. Estos pedidos son frecuentemente rechazados por la guerrilla o por los menores mismos que, a veces, forman parte de las FARC-EP o de otros grupos disidentes por años o incluso décadas. Luego del alto al fuego, las comunidades indígenas desarrollaron estrategias más orgánicas; por ejemplo, enviando autoridades indígenas masculinas para negociar con los comandantes de las FARC-EP. En algunos casos, los negociadores indígenas han viajado a los distantes campamentos de Carurú para presentar pedidos de parientes u otros miembros de la comunidad.

Algunos excombatientes indígenas volvieron a sus comunidades de origen, ya sea a raíz de abandonar la lucha individualmente o por su

16 Guerrilleros, paramilitares y destacamentos militares ocupan grandes extensiones de territorio indígena, obligando a los miembros de diferentes comunidades a servir como guías o informantes a través de amenazas a sus familias (Roldan, 2000; Charles, 2021).

desmovilización colectiva en el marco del proceso de paz. Sus padres nos comentaron, sin embargo, que muchos de estos jóvenes o adultos consideran que sus comunidades no garantizan un porvenir para ellos en los territorios. Pues, en muchos casos, incluso cuando fueron reclutados forzosamente, ya se habían integrado al mundo “fariano” (esta expresión refiere a la forma de ver el mundo al ser parte de las FARC). A su vez, ante la presencia de servicios precarios, el abandono por parte del Estado y el aislamiento de esta región del resto del país, los jóvenes siguen siendo vulnerables a las propuestas de los diferentes actores armados, que valoran su conocimiento del territorio y de sus caminos y, además, les ofrecen una salida de sus comunidades de origen.

Aquellos que en las comunidades ofrecen resistencia al reclutamiento son muchas veces amenazados o atacados, como esta cita lo ilustra:

Una lideresa indígena del Vaupés fue amenazada por las FARC porque se rehusó al reclutamiento forzado en su comunidad y fue víctima de dos ataques, que incluyeron la participación de jóvenes de su propia comunidad, que habían sido reclutados previamente como milicia de FARC. (CNMH, 2017, p. 449)

Otros líderes comunitarios contaron historias similares, incluyendo casos de secuestro y cautiverio en campamentos guerrilleros en los que había jóvenes de sus propias comunidades.

En conclusión, el reclutamiento de menores por parte de la guerrilla ha sido un factor disruptivo en las relaciones de la comunidad, causando el desplazamiento forzado y la ruptura de relaciones entre miembros de una familia o entre diferentes familias. La madre de una joven guanano nos comentó sobre estos problemas durante nuestra visita a la región en 2018. Dijo, con cierto disgusto, que su hija se había disociado (“desvinculado”) de las FARC-EP hacía más de diez años, en el contexto de la Ley de Paz y Justicia (2005). Su hija se había mudado con su pareja e hijo a otra ciudad y no había regresado a su comunidad de origen en Villa Fátima. La mujer nos explicó que ella y su marido visitan a su hija esporádicamente, dado que no puede volver a su aldea sin causarles problemas. Acusa a la escuela por su pasividad

frente al reclutamiento de la guerrilla, aunque al mismo tiempo hay maestros desaparecidos o asesinados por haberse opuesto a este tipo de práctica. Las dinámicas del reclutamiento y las dificultades enfrentadas por los miembros de comunidades indígenas, que emplean diversas estrategias para recuperar a jóvenes reclutados, exponen las tensiones constantes presentes no solo en negociar con actores armados y con el Estado, sino también dentro de las comunidades mismas.

Uno de los temas subyacentes que se encuentra inmerso en estas tensiones da cuenta de las dificultades en la transmisión intergeneracional de los valores étnicos y sus visiones del mundo. El reclutamiento no creó el abismo generacional, pero lo hizo más profundo. Estos conflictos dentro de las comunidades producen también disputas sobre el liderazgo comunitario. Muchos de los jóvenes reclutados por la guerrilla, cuando se reinsertan en las comunidades, cuestionan a las autoridades tradicionales.

Si bien son pocos los casos de jóvenes reclutados que retornen a sus comunidades, aquellos que lo hacen deben atravesar múltiples situaciones de interpelación y de evaluación por parte de los ancianos o autoridades tradicionales. Muchos de los obstáculos a la posible integración de excombatientes se nos revelaron durante conversaciones que tuvimos con líderes guanano y tukano. Ellos temían no poder controlar lo que pasara durante las ceremonias, mientras se bebía chicha o guarapo,¹⁷ y que emergieran manifestaciones de violencia generadas por acusaciones y resentimiento no solo entre los excombatientes, sino también entre quienes se quedaron en la comunidad y fueron estigmatizados como simpatizantes o parientes de guerrilleros.¹⁸

17 La chicha es una bebida hecha con maíz fermentado, mientras que el guarapo está hecho con jugo de caña fermentado.

18 Jackson (2005) afirma que “las comunidades indígenas son blanco de todos los grupos armados: militares, paramilitares y guerrilleros. Entre principios de la década de 1970 y 1996, más de 400 líderes indígenas fueron asesinados y ninguno de sus asesinos fue llevado ante la justicia” (p. 196). Continúan asumiendo que los indígenas son partidarios reales o potenciales de las guerrillas, debido a su ubicación geográfica y su pobreza, y por lo tanto son objetivos apropiados para

Además, los ancianos temían perder su poder tradicional en manos de jóvenes que tendían a resistir su autoridad.

Un líder nos contó que, durante una discusión subida de tono con un exfariano desmovilizado, que había comenzado su proceso de reintegración, le dijo: “Te llamas comunista, pero no piensas en términos de comunidad ¿qué tipo de comunista eres?”. Estas tensiones se parecen a aquellas identificadas por Jackson entre las autoridades tradicionales tukano y los jóvenes activistas del Consejo Regional Indígena del Vaupés (CRIVA). Jackson (1999) afirma que, los activistas locales de CRIVA eran “hombres jóvenes que desafiaban los patrones de autoridad tradicionales basados en un sistema de líderes comunitarios, asesorados por sus parientes paternos” (p. 287).¹⁹

En un contexto en el que no ha cesado el reclutamiento de menores indígenas y con la presencia de nuevos actores armados y criminales en la región, la apertura de espacios de diálogo incipientes entre los que permanecieron en la comunidad y los excombatientes que volvieron ha enfrentado severos desafíos.

Existe también un enfrentamiento entre los poderes legales de las organizaciones indígenas y las entidades gubernamentales. En el Vaupés, como en todo el país, existe una superposición de territorialidades y de jurisdicciones con la consecuente colisión de competencias legales a consecuencia de disparidades de visiones y de prioridades. La manera

las medidas de contrainsurgencia (Van Cott, 1994, p. 10). Esta estigmatización, a veces, se reproduce dentro de las propias comunidades indígenas.

- 19 Jackson (1999) señala que “tradicionalmente, el Vaupés no tenía organizaciones regionales federadas o grupos corporativos políticos de ningún tipo por encima del nivel del asentamiento. Además, los tukano sienten una gran ambivalencia hacia cualquiera que actúe como superior, un mecanismo de control social que amortigua los efectos de las diversas formas de jerarquía social en la región. Las afirmaciones de autoridad y rango deben ocurrir y ocurren en las interacciones tukano, pero deben hacerse bien, o serán recibidas con risas y resentimiento. Desafortunadamente, los patrones no indígenas de afirmar la autoridad, que molestan a los tukanos sin importar quién los muestre, porque parecen arrogantes y pomposos, son lo que a veces imitan los hombres más jóvenes” (p. 287).

en que la reintegración y la reinserción de excombatientes es enfocada, está influenciada por estas tensiones que, si bien son expresadas por ciertos individuos, reflejan conflictos entre la autoridad estatal y sus instituciones, grupos ilegales y las autoridades de las comunidades indígenas, entre otros actores. La reintegración de jóvenes reclutas depende de las dinámicas que dan forma a las relaciones sociopolíticas, culturales e intergeneracionales a nivel local. Como apunta Jackson (1999), el enfoque etnográfico puede servir para informar y delimitar el rol del investigador y de las políticas públicas en estas situaciones fuertemente politizadas.

Conclusiones

Esperamos haber hecho una contribución antropológica a la comprensión y a la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. Mostramos los desafíos que los excombatientes tuvieron que enfrentar durante su proceso de reintegración utilizando dos casos de estudio de dos diferentes regiones de Colombia. El primero, desarrollado en un campamento de excombatientes de las FARC, revela la traumática situación liminal experimentada por exguerrilleros que no han podido integrarse en la vida civil por sí mismos. Ya no son guerrilleros, pero tampoco se integran completamente a la sociedad civil colombiana. Su pasaje de miembros de la guerrilla a civiles ha sido pospuesto indefinidamente. En última instancia, su reincorporación depende en la capacidad del Estado colombiano de cumplir con los acuerdos de la Habana y con la destreza de su propio liderazgo para mantener su grupo unido en esa decisión.

El segundo caso estudiado está centrado en las dificultades enfrentadas por jóvenes indígenas que fueron reclutados por grupos armados, cuando decidieron volver a la vida civil y reincorporarse en sus comunidades étnicas de origen. Las decisiones individuales están restringidas por el juicio de las autoridades de sus comunidades. Etiquetamos este caso con el término émic de “reinserción”, en donde la aceptación de cada proceso depende sobre todo de los ancianos o

autoridades tradicionales, interesados en proteger a sus comunidades de conflictos internos.

El estigma de haber sido miembros de la guerrilla y las dificultades mismas del proceso de reinserción hacen que muchos excombatientes decidan mantenerse fuera de sus comunidades de origen y que busquen otros lugares donde vivir. La falta de un nuevo propósito en sus vidas puede empujar su incorporación en otros grupos guerrilleros, fuerzas paramilitares o bandas de narcotraficantes, que reconocen sus conocimientos de combate previos.

Ambos casos nos muestran que la reintegración a la vida civil no es un proceso homogéneo ni tampoco unilateral. Más bien, podríamos afirmar que la reintegración depende más de contextos y conflictos locales, que de la disputa entre grupos armados.

Los casos antropológicos presentados muestran cómo los procesos de paz afectan la vida real de las personas, revelando y develando conflictos y problemas no detectados muchas veces por los hacedores de políticas de paz que, a menudo, no trabajan en el terreno por tiempos prolongados. La antropología aplicada, combinada con otras ciencias sociales, ayuda a entender que lograr la reintegración depende del tipo de sociedad a la que retornará el excombatiente y del proceso en que se desarrolla el retorno. Comprender las perspectivas y expectativas de los actores involucrados y los puntos de tensión localizados a nivel local será sin duda útil para mejorar la efectividad de las políticas de paz.

Referencias bibliográficas

- Álvarez, S., & Torres Palacio, P. (2020). El limbo, el terror y la victoria: los efectos del proceso de paz colombiano en los territorios de Urabá y Bajo Atrato. En S. Álvarez, A. Guglielmucci & J. Spota (eds.), *El proceso de paz de Colombia en la encrucijada* (pp. 71-95). CEDEAD.
- Álvarez, S., Guglielmucci, A., & Torres Palacio, P. (2022). Towards an Anthropology of Peace: Reintegration of Former Guerrillas into Colombian Society. *Human Organization*, 81(2), 141-149.

- Alves, A. (2021). Esa paz blanca, esa paz de muerte. *Revista Colombiana de Antropología*, 57(2), 143-167.
- Barrios Sabogal, L., & Richter, S. (2019). Las farianas: reintegración de mujeres excombatientes de las FARC como motor para la paz en Colombia. *Cuadernos de Economía*, 38(78), 753-784.
- Bergquist, C., Peñaranda, R., & Sánchez, G. (1992). *Violence in Colombia. The Contemporary crisis in Historical Perspective*. SR Books.
- Bloch, M. (1994). *Prey into Hunter. The Politics of Religious Experience*. Cambridge University Press.
- Bloch, M. (2020). Prólogo. En S. Álvarez, *Leviatã e seus lobos. Violência e poder numa comunidade dos Andes colombianos*. Unjuí Editora.
- Borneman, J. (2020). World Peace in the Cold War: Anthropological Contributions. *Hau: Journal of Ethnographic Theory*, 10(2), 289-293.
- Burnyeat, G. (2020). Peace Pedagogy and Interpretative Frameworks of Distrust: State-Society Relations in the Colombian Peace Process. *Bulletin of Latin American Research*, 39(1), 37-52.
- Cairo, H., Oslender, U., Piazzini Suárez, C., Ríos, J., Koopman, S., Montoya Arango, V., Rodríguez Muñoz, F., & Zambrano Quintero, L. (2018). "Territorial Peace": The Emergence of a Concept, Colombia's Peace Negotiations. *Geopolitics*, 23(2), 464-488.
- Charles, M. (2021, 1 de abril). *Bajo Cauca y Vaupés, ejes del reclutamiento de menores en Colombia*. InSight Crime. <https://bit.ly/3PC6KAX>
- CNMH. (2017). *Una Guerra sin edad: informe nacional de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombiano*. Centro Nacional de Memoria Histórica.
- Defensoría del Pueblo. (2015, 15 de octubre). *Informe de Riesgo nº 020-15 A.I.* <https://bit.ly/3T3AY2O>
- El Espectador. (2019, 29 de agosto). *Iván Márquez le da la espalda al proceso de paz y anuncia su rearme* [Video]. YouTube. <https://bit.ly/3Af9ajv>
- Espinosa, M. (2007). Ese indiscreto asunto de la violencia: modernidad, colonialidad y genocidio en Colombia. En R. Grosfoguel & S. Castro Gómez (eds.), *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global* (pp. 267-288). Siglo del Hombre.
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means. Peace and Conflict, Development and Civilization*. SAGE.
- Gluckman, M. (1958). *Analysis of a Social Situation in Modern Zululand*. Manchester University Press; Rhodes-Livingstone Institute.

- Gómez, D., & Montealegre, D. (2021). Colombian Women and Feminist Movements in the Peace Negotiation Process in Havana: Complexities of the Struggle for Peace in Transitional Contexts. *Social Identities*, 27(4), 445-460.
- Guglielmucci, A., & Rozo, E. (2020). Memorias (des)encontradas: tomas guerrilleras, militarización y post-acuerdo en Mitú (Vaupés). En S. Álvarez, A. Guglielmucci & J. Spota (eds.), *El proceso de paz de Colombia en la encrucijada* (pp. 37-69). CEDEAD.
- Hinestroza-Arenas, V. (2008). Reclutamiento de niños y niñas: fenómeno invisibilizado, crimen manifesto. *OASIS*, 13, 45-60.
- Hydle, I. (2006). An Anthropological Contribution to Peace and Conflict Resolution Studies. *Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice*, 9(3), 257-267.
- Jackson, J. (1999). The Politics of Ethnographic Practice in the Colombian Vaupés, *Identities: Global Studies in Culture and Power*, 6(2-3), 281-317. <https://doi.org/10.1080/1070289X.1999.9962646>
- Jackson, J. (2005). Colombia's Indigenous Peoples Confront the Armed Conflict. En C. Rojas & J. Meltzer (eds.), *Elusive Peace: International, National, and Local Dimensions of Conflict in Colombia* (pp. 185-208). Palgrave.
- Jaramillo Marín, J. (2012). El libro "La violencia en Colombia (1962-1964)", radiografía emblemática de una época tristemente célebre. *Revista Colombiana de Sociología*, 35(2), 35-64.
- Jiménez Martín, C., & Zuluaga Nieto, J. (eds.). (2021). *Incertidumbres de la paz: entre el incumplimiento del Acuerdo y las luchas sociales en su defensa*. CLACSO.
- Koopman, S. (2020). Building an Inclusive Peace is an Uneven Socio-spatial Process: Colombia's Differential Approach. *Political Geography*, 83, 102252.
- ONU. (2018a, 2 de abril). *Informe del Secretario General sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia*. <https://bit.ly/3QYffaF>
- ONU. (2018b, 26 de diciembre). *Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia: informe del Secretario General*. <https://bit.ly/2sFzErQ>
- Pecault, D. (2001). *Orden y violencia: evolución socio-política de Colombia entre 1939 y 1953*. Norma.
- Richmond, O. P. (2018). Rescuing Peacebuilding? *Anthropology and Peace Formation*, 32(2), 221-239.
- Roldan, R. (2000). *Pueblos indígenas y leyes en Colombia: aproximación crítica al estudio de su pasado y su presente*. Tercer Mundo.

- Sánchez, G. (coord.). (1992). *Colombia, violencia y democracia. Informe presentado al Ministerio de Gobierno*. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
- Schepler, S. (2005). The Rites of the Child: Global Discourses of Youth and Reintegrating Child Soldiers in Sierra Leone. *Journal of Human Rights*, 4(2), 197-211.
- Steiner, C. (1993). Urabá: de región de frontera a región de conflicto. En M. Jimeno Santoyo (ed.), *Conflicto social y violencia: notas para una discusión* (pp. 63-71). IFEA.
- Turner, V. (1974). *Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society*. Cornell University Press.
- Turner, V. (1990). *La selva de los símbolos*. Siglo XXI.
- Universidad de los Andes. (2019). *Atención Primaria en salud como una iniciativa para el abordaje del suicidio en comunidades indígenas de Vaupés (Colombia)*. <https://bit.ly/3pzdEMF>
- Van Cott, D. L. (1994). *Indigenous peoples and democracy in Latin America*. St. Martin's Press.
- Van Gennep, A. (1986). *Los ritos de paso*. Taurus.
- Vicepresidencia de la República. (2004). *Los derechos humanos en el departamento de Vaupés*. Programa presidencial de derechos humanos y derecho internacional humanitario. <https://bit.ly/3K8V6MG>